

Bojayá: memoria y horizontes de paz*

Bojayá: memory and horizons of peace

Bojayá: memória e horizontes de paz

Natalia Quiceno Toro**

Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia

Camila Orjuela Villanueva***

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Bogotá, Colombia

Cómo citar este artículo: Quiceno, N. y Orjuela, C. (2017). Bojayá: memoria y horizontes de paz. *Rev. Colomb. Soc.*, 40(Suplemento 1), 103-127.

doi: 10.15446/rcs.v40n1Supl.65909

Este trabajo se encuentra bajo la licencia Creative Commons Attribution 4.0.

Artículo de reflexión

Recibido: 31 de mayo del 2016

Aprobado: 15 de noviembre del 2016

* Artículo de reflexión resultado del trabajo de acompañamiento de las autoras a las comunidades de Bojayá, en su papel de investigadora en el componente étnico del Centro Nacional de Memoria Histórica, para el caso de Camila Orjuela Villanueva, y, en el proceso de elaboración de su tesis doctoral y posteriormente como investigadora del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, en el caso de Natalia Quiceno Toro.

** Doctora en Antropología Social del Museo Nacional de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Profesora del Instituto de Estudios Regionales (INER) de la Universidad de Antioquia. Correo electrónico: natalia.quiceno@udea.edu.co-ORCID: 0000-0001-9689-4835

*** Estudiante de la Maestría en Antropología Social de la Universidad de los Andes. Investigadora del equipo de enfoque étnico del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Correo electrónico: camila.orjuela@centrodememoriahistorica.gov.co-ORCID: 0000-0001-7975-5040

Resumen

La masacre de Bojayá, como lo mostró el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, constituye un caso representativo para pensar los efectos de la guerra en las comunidades negras del Medio Atrato y sus territorios colectivos. En este artículo, se pone en evidencia cómo las dinámicas y tensiones que han vivido los habitantes de este municipio, por temas como la construcción de memorias colectivas, la reparación, el restablecimiento y el perdón, también son emblemáticas y plantean retos y controversias con respecto a los discursos más institucionalizados sobre la memoria, en tiempos de guerra y de construcción de horizontes de paz. Se estudian algunos espacios de emergencia de las memorias, tales como la producción del informe *Bojayá. La guerra sin límites*, la conmemoración de la masacre cada 2 de mayo y los actos públicos, por ejemplo, el del 6 de diciembre del 2015, en el que las FARC-EP reconocieron su responsabilidad en la perpetración de la masacre.

Los eventos ocurridos después de la masacre, la violencia armada, política y social que persiste en el Medio Atrato y las transformaciones que la gente de esta región ha vivido han puesto temporalidades y moralidades en tensión y llevan a considerar los múltiples retos que el país tiene al pensar los procesos de reparación colectiva y la consolidación de una paz duradera en los territorios. En este sentido, en el artículo se reconocen los trabajos de la memoria en Bojayá como detonantes de discusiones políticas sobre el futuro y sobre la manera en que se representan las experiencias vividas en medio de la guerra presente y pasada. Se muestra cómo un evento —la masacre de Bojayá— pone en tensión y activa otra serie de memorias que señalan una relación particular con el tiempo, la construcción de paz y el territorio. El artículo es una reflexión fruto del trabajo de las investigadoras en diferentes proyectos y procesos de acompañamiento en la región, especialmente en iniciativas lideradas por el Centro Nacional de Memoria Histórica y el desarrollo de investigaciones etnográficas con diversas comunidades afrocolombianas del municipio de Bojayá.

Palabras clave: Bojayá, guerra, memoria histórica, paz, transiciones políticas.

Abstract

As shown in the report of the National Center for Historical Memory, the Bojayá massacre is a representative case in thinking about the effects of the war on the Black communities of the Middle Atrato and their collective territories. The article shows how the dynamics and tensions experienced by the inhabitants of this municipality, due to issues such as the construction of collective memories, reparation, reestablishment, and forgiveness, are emblematic and pose challenges and controversies with respect to the more institutionalized discourses on memory, both in times of war and of building horizons for peace. The paper examines some of the spaces of emergence of memories, such as the production of the report Bojayá. La guerra sin límites (Bojayá, A Boundless War), the commemoration of the massacre every May 2nd, and public acts, such as that of 6 December 2015, in which the FARC-EP acknowledged their responsibility in perpetrating the massacre.

The events occurred after the massacre, the continued political and social armed violence in the Middle Atrato, and the transformations experienced by the inhabitants of the region have put temporalities and moralities into tension and made it essential to consider the multiple challenges the country must face when thinking about collective reparation processes and the consolidation of a lasting peace in the territories. In this sense, the article sees the work of memory carried out in Bojayá as fostering political discussions about the future and the way in which experiences lived during the past and present wars are represented. It shows how an event —the Bojayá massacre— triggers another series of memories that reveal a peculiar relationship to time, peacebuilding, and territory. The article is a reflection resulting from the work of the researchers in different projects and assistance processes in the region, especially in initiatives led by the National Center for Historical Memory, as well as in the development of ethnographic research projects in different Afro-Colombian communities in the municipality of Bojayá.

Keywords: Bojayá, war, historical memory, peace, political transitions.

Resumo

O massacre de Bojayá, como foi mostrado pelo relatório do Centro Nacional de Memória Histórica, constitui um caso representativo para pensar nos efeitos da guerra nas comunidades negras do Medio Atrato e de seus territórios coletivos. Neste artigo, evidencia-se como as dinâmicas e as tensões que os habitantes desse município têm vivido, por temas como a construção de memórias coletivas, a reparação, o restabelecimento e o perdão, também são emblemáticas e apresentam desafios e controvérsias a respeito dos discursos mais institucionalizados sobre a memória, em tempos de guerra e de construção de horizontes de paz. Estudam-se alguns espaços de emergência das memórias, tais como a produção do relatório Bojayá. La guerra sin límites, a comemoração do massacre a cada 2 de maio e os atos públicos, por exemplo, o do dia 6 de dezembro de 2015, no qual as FARC-EP reconheceram sua responsabilidade na perpetração do massacre. Os eventos ocorridos depois do massacre, a violência armada, política e social que persistem no Medio Atrato, e as transformações que os habitantes dessa região têm vivido colocam temporalidades e moralidades em tensão e levam a considerar os múltiplos desafios que o país tem ao pensar nos processos de reparação coletiva e na consolidação de uma paz duradoura nos territórios. Nesse sentido, neste artigo, reconhecem-se os trabalhos da memória de Bojayá como detonantes de discussões políticas sobre o futuro e sobre a maneira em que as experiências vividas são representadas em meio à guerra presente e passada. Mostra-se como um evento —o massacre de Bojayá— coloca em tensão ativa outra série de memórias que indicam uma relação particular com o tempo, com a construção de paz e com o território. Este artigo é uma reflexão fruto do trabalho das pesquisadoras em diferentes projetos pelo Centro Nacional de Memória Histórica e no desenvolvimento de pesquisas etnográficas com diversas comunidades afro-colombianas do município de Bojayá.

Palavras-chave: Bojayá, guerra, memória histórica, paz, transições políticas.

Tiempos de guerra y paz en Bojayá

El 2 de mayo del 2002, la historia de los bojayaseños se transformó por completo. En la cabecera municipal, Bellavista, aproximadamente setenta y nueve personas fueron asesinadas en una masacre ocasionada por enfrentamientos entre los grupos armados de la guerrilla de las FARC-EP y los paramilitares, quienes se disputaban el dominio territorial de la región. Fueron varios días de enfrentamiento, durante los cuales el Estado colombiano permaneció indiferente, dado que no tomó acciones para proteger a la población civil, a pesar de las alertas emitidas por el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina del Medio Atrato (COCOMACIA), la Diócesis de Quibdó y los organismos de derechos humanos. En medio de las disputas entre grupos armados, en las que hubo nexos entre miembros de las Fuerzas Militares y los grupos paramilitares, cuatro pipetas de gas llenas de metralla fueron lanzadas por las FARC-EP a los paramilitares; una de ellas cayó en la iglesia donde muchos de los habitantes del pueblo se refugiaban. Entre los muertos, había cuarenta y ocho menores de edad. Otras trece personas de los pueblos de Napipí, Vigía del Fuerte y Puerto Conto murieron por los enfrentamientos que se dieron los días previos y posteriores al 2 de mayo. Hasta el día de hoy, otras diez¹ personas han muerto de cáncer debido a las esquirlas que dejó la explosión. Otras víctimas, a pesar de que se han recuperado, llevan las huellas, en su cuerpo y en su memoria, de este terrible momento que marcó la historia del Atrato. Más de 5000 personas tuvieron que desplazarse forzosamente, pues los enfrentamientos no cesaron con la masacre (CNRR-GMH, 2010).

Después de ese acontecimiento, que marcó la vida de los habitantes, vinieron ciclos complejos de tensión y calma que parecen no culminar hasta el día de hoy. Muchas otras acciones, tanto del Gobierno nacional como de los grupos armados, que aún hacen presencia en la zona, continúan incidiendo en la cotidianidad y las expectativas de este pueblo. Entre los eventos más rememorados por la población están el retorno de la mayoría de la población desplazada al municipio en septiembre del año 2002, el nuevo desplazamiento forzado vivido por las comunidades rurales del río Bojayá en el 2005 —por la entrada del bloque paramilitar Elmer Cárdenas— y la reubicación de la cabecera municipal en el 2007, en lo que hoy denominan el Nuevo Pueblo de Bellavista.

1. Tras la publicación del informe *Bojayá. La guerra sin límites*, el registro de muertes ha aumentado y se han identificado casos de personas desaparecidas. Los líderes de las organizaciones locales y regionales siguen insistiendo en la necesidad de llevar a cabo investigaciones que establezcan las relaciones entre el aumento de casos de cáncer y las lesiones físicas, morales y culturales que ocasionó la masacre. A la vez, solicitan a las entidades competentes culminar el proceso de exhumación, individualización, identificación y entrega de los cuerpos de sus muertos, iniciado el 3 de mayo del 2017, en el marco de los acuerdos establecidos con la comunidad.

En febrero del 2012, se celebró en los medios de comunicación nacional² un importante “golpe” a las FARC-EP en zona rural del municipio de Bojayá. El hecho se presentó como un paso más en el ajuste de cuentas por la masacre. La declaración del presidente Santos y el despliegue que esta acción militar tuvo en su momento contrastaron con las formas como en el municipio se vivió el acontecimiento y mostraron las tensiones que existen con respecto a temas como la justicia y la paz en territorios marcados por la guerra. La celebración del nuevo “logro” militar del 2012 representó una forma de entender la justicia a través del abatimiento de los “culpables” de un acontecimiento atroz en una guerra que lleva más de cincuenta años. Sin embargo, de forma paralela, esta noticia circuló en el municipio dejando otras conclusiones. Antes de que llegara la noticia y las declaraciones del presidente, los rumores corrían por el pueblo de Bellavista: “Hubo un bombardeo”, “había un campamento”, “cayeron varios, uno era de los jefes”, “esto se calentó, se apretó”; sin embargo, la frase que más nos llamó la atención fue la de una vecina del barrio Bella Luz cuando dijo: “Si ve, esta guerra sigue, está viva y empeorando”. Nadie en el pueblo se alegró con el “logro militar”. Una conclusión era evidente: matar a ese “enemigo” no era una forma de hacer justicia, era más bien la evidencia de que en sus territorios se continúa librando una guerra en la que la población civil continúa recibiendo los principales daños y afectaciones.

Para las comunidades negras e indígenas del municipio de Bojayá y para las víctimas de la masacre³, el debate sobre las responsabilidades, los daños, las formas de reparación y la búsqueda de justicia y verdad constantemente pone en escena diversas temporalidades y conflictos. Pero, sobre todo, es un debate que no se resuelve cuando se “da de baja” a un hombre más en operaciones militares o cuando se les niega a los excombatientes la posibilidad de participar en política y rehacer la vida sin armas⁴.

Meses después, el 18 de octubre de ese mismo año, se concretó la instalación de la mesa de diálogos de paz entre las FARC-EP y el Gobierno nacional, en Oslo (Noruega). A pesar del contexto político favorable, el

2. “Cae ‘Mapanao’, presunto responsable de la masacre de Bojayá”. A través de su cuenta de twitter, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que el hombre había sido dado de baja en un golpe a las FARC-EP (*Semana*, 2012, 22 de febrero).
3. A propósito de la jurisprudencia y normativa internacional y nacional de protección a los derechos humanos, las víctimas se han convertido en un actor fundamental de los procesos que se gestan en el mundo para transitar a escenarios de paz. Ellas se han forjado un lugar no solo como testigos, sino como sujetos políticos e históricos. Tras la ocurrencia de la masacre del 2 de mayo, varias organizaciones de víctimas se han creado en la región, de manera que se ha ampliado el panorama organizativo antes vinculado a Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas. Algunas de estas organizaciones son el Comité Dos de Mayo, la asociación Dos de Mayo y, creado más recientemente, el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá.
4. El 2 de octubre del 2016 en el municipio de Bojayá el sí a la implementación de los acuerdos de paz alcanzados en La Habana entre el Gobierno y las FARC-EP ganó con un 95,78 %.

lugar de las víctimas en dicho diálogo y el reconocimiento de sus voces como elemento indispensable para la construcción de la paz fue un tema en tensión. Organizaciones sociales a lo largo de todo el país y especialmente de los territorios más afectados por la guerra trabajaron arduamente para participar en el proceso. Después de superar varias dificultades, finalmente se concretaron importantes avances, y temas como el perdón y las víctimas ganaron lugar en el debate público en La Habana, con lo que se puede plantear que estas constituyen el centro del acuerdo final.

Dado que la masacre de Bojayá fue uno de los eventos emblemáticos de la degradación que tuvo lugar en la guerra, en el marco de las negociaciones, la guerrilla de las FARC-EP manifestó el interés de llevar a cabo un acto simbólico de perdón ante el pueblo bojayaseño. El 18 de diciembre del 2014, el grupo guerrillero hizo un primer acto de reconocimiento de su responsabilidad en los hechos cometidos durante la masacre del 2 de mayo del 2002. En un comunicado, manifestaron su arrepentimiento y reconocieron su responsabilidad. Uno de los voceros de las FARC-EP habló del compromiso de la guerrilla no solo con hacer pública su intención de perdón, sino con resarcir el daño a partir de acciones reparadoras y transformadoras en las comunidades locales que fueron afectadas por su acción militar del 2002.

Meses después, el 6 de diciembre del 2015, las FARC-EP realizaron el primer acto de reconocimiento de responsabilidades y solicitud de perdón a propósito de la masacre. Como parte de un gesto de avanzada respecto a lo estipulado en el Acuerdo por las Víctimas⁵, lo ocurrido en Bojayá trazó el punto de inicio de la aplicación de la primera medida de reparación integral derivada de los diálogos gestados en La Habana. Tras un proceso de preparación de varios meses del acto por parte de las organizaciones de víctimas, afro e indígenas de la región, Bojayá recibió a delegaciones del Gobierno y del grupo guerrillero en el pueblo, que es hoy el vestigio más significativo de la masacre.

De estos acontecimientos y sus consecuencias, nos interesa resaltar cómo Bojayá continúa siendo un símbolo activo en los debates sobre el conflicto armado, los escenarios de transición y la construcción de paz, en el ámbito nacional. Para los habitantes del municipio de Bojayá, el conflicto armado es una realidad que se experimenta día a día. Cada movimiento de las Fuerzas Militares del Estado, de las guerrillas y otros grupos armados que operan en la región tiene implicaciones importantes en las actividades que cotidianamente pueden o no realizar. Las negociaciones de paz entre las FARC-EP y el Gobierno le dieron nuevas esperanzas al pueblo bojayaseño,

5. “En el marco del fin del conflicto el Gobierno y las FARC-EP hemos acordado que, en desarrollo de este Acuerdo, el Gobierno Nacional apoyará la realización, lo antes posible, luego de la firma del Acuerdo Final, de actos de reconocimiento y de contrición en los cuales el Gobierno, las FARC-EP y diferentes sectores de la sociedad que puedan haber tenido alguna responsabilidad en el conflicto reconozcan su responsabilidad colectiva por el daño causado y pidan perdón, asumiendo cada uno lo que le corresponde, como expresión de voluntad de contribuir a un definitivo Nunca Más” (Alto Comisionado para la Paz, 2015, 15 de diciembre).

el cese al fuego bilateral les permitió “resollar” un poco. Sin embargo, después del resultado del plebiscito en el que ganó, por un estrecho margen, la decisión de no implementar los acuerdos con esta guerrilla, los bojayaseños se sintieron defraudados y presos nuevamente de un ambiente de incertidumbre⁶.

En esos ritmos, que van de la confrontación a la negociación, del acuerdo a la incertidumbre, los trabajos de la memoria han constituido una herramienta política para las comunidades. Reivindicar su lugar como sobrevivientes, víctimas y pueblos en resistencia ha sido una de las estrategias que emergen en los escenarios en los que la memoria de los acontecimientos atroces vuelve al presente, pero también en los que se reivindica la memoria de una historia más compleja, que no empieza ni termina con la masacre del 2 de mayo del 2002.

En este artículo, nos interesa aproximarnos a la experiencia de construcción de la memoria en el municipio de Bojayá, a los dispositivos que han estado involucrados en los procesos de su construcción y a las formas como ella se presenta en acciones ciudadanas y procesos políticos en torno al perdón y la construcción de la paz. Las articulaciones entre memoria, política y poder podrán ser leídas mediante las trayectorias e implicaciones que han tenido diversos ejercicios de reconstrucción de la memoria histórica. En el análisis que proponemos, veremos cómo la composición y la articulación de diversas memorias tiene lugar y cómo lo que podría ser calificado de un relato oficial tiene posteriores apropiaciones que trascienden su contexto de producción, al crear nuevos relatos y al propiciar nuevas modalidades y condiciones de existencia.

El artículo está dividido en tres partes. La primera parte, “Memoria y transición”, ubica algunos debates sobre la memoria de las víctimas en contextos de transición política. La segunda parte, “La construcción de un informe de memoria histórica en Bojayá”, describe el proceso de construcción de la memoria histórica de la masacre, promovido por el Grupo de Memoria Histórica —en adelante GMH—. Allí se describen los procesos de negociación y participación en la construcción del informe y da paso a reflexiones sobre las maneras en que los bojayaseños se apropiaron de este. La tercera parte, “Hacer memoria y activar dispositivos de tránsito a la paz”, describe dos actos públicos en los que la memoria de la masacre del 2002 emerge para ser articulada a luchas y demandas del presente, pero también a horizontes de futuro. Finalmente, el artículo propone una reflexión sobre la importancia de hacer visibles las tensiones y posibilidades propias de una dinámica social y política que evidencia el lugar de la memoria en nuevos y renovados procesos y luchas locales.

Memoria y transición

El filósofo español Manuel Reyes Mate entiende que el deber de la memoria y el reconocimiento de las experiencias de horror son el punto

6. Véase *Pacifista* (2016, 1 de noviembre).

de partida de una reflexión política, moral o estética (2008). Así, es posible considerar que la masacre de Bojayá desató y activó posibilidades de pensamiento y reflexión singulares entre los pueblos afro e indígena en el Medio Atrato. En este sentido, la memoria aparece como fuerza, como potencia de pensamiento y creación y no exclusivamente como la vuelta al dolor y al acontecimiento atroz.

Por su parte, Nelly Richard habla de una *memoria crítica* y una *crítica de la memoria*, para llamar la atención sobre la necesidad de unas memorias que sean capaces de “oponerse al desgaste, a la borradura del recuerdo que sumerge al pasado en la indiferencia”. Al mismo tiempo, señala que es necesaria una memoria “que, vigilante, sospeche de la abusiva comercialización del drama a cargo de relatos sensacionalistas, o simplemente, negligentes” (2002, p. 188).

Richard hace un análisis crítico de los años de transición en Chile y plantea que durante este tiempo “el peso equilibrante del consenso reprimió la heterogeneidad conflictiva y disidente de lo social (su tumulto de voces)” (2002, p. 189). En este contexto, ubica la memoria como una “zona de enunciación política, de performatividad mediática y de intervención callejera” (Richard, 2002). La autora advierte, entonces, sobre los riesgos de la instalación de consensos en contextos de transición, en los que lo político puede ser reducido al “ejercicio técnico-administrativo de la política” (p. 190). Reconocer y seguir ese carácter político de la memoria, en el que el conflicto, el antagonismo y la controversia tengan posibilidad de existencia es clave, en la perspectiva de Richard (2002), para lograr captar las tensiones entre la memoria y la desmemoria. Este punto de vista es bastante pertinente en nuestro caso colombiano para estudiar, desde miradas críticas, la instalación de diversas *discursividades transicionales* y reconocer el carácter normalizador que estas pueden tener:

Para algunos de nosotros, la palabra “transición” va ligada no solo al artefacto político-institucional que regularizó el tránsito entre dos periodos históricos; se asocia también a la mediación oficial de un cierto sociologismo integrado que puso sus lenguajes eficientes al servicio de la recomposición funcional —y funcionaria— de una sociedad dócil. (Richard, 2002, p. 190)

En nuestro contexto, ya lo ha señalado el antropólogo Alejandro Castillejo en diversos artículos, la memoria no puede ser naturalizada ni mucho menos ser instituida como el campo de la superioridad moral o el camino hacia la unidad nacional (2013, p. 27). De lo que se trata es de problematizar su papel como un espacio donde entran en tensión tanto versiones del pasado como versiones del futuro. Se trata de cuestionar el carácter universal que toma la memoria en los contextos de la justicia transicional, una memoria que muchas veces se limita a las violencias recientes “en las que la rememoración oficial de corto plazo sería suficiente para la anhelada reconciliación” (2013, pp. 30-31). Las tensiones y controversias constituyen una fuerza creativa que puede ser mucho más constructiva

que los consensos y la unidad, muchas veces contruidos *a priori*, a costa de la institucionalización de ciertos discursos y presupuestos sobre lo que significa recordar el pasado y reconstruir el futuro (Castillejo, 2013). Hacer memoria implica, por lo tanto, encuentros entre diversas controversias, encuentros entre posiciones éticas y políticas públicas que confrontan o potencian el recuerdo y el olvido propios de los contextos locales.

Si entendemos el poder de la memoria a través de su capacidad para hacer emerger tensiones, debates y conflictos, estamos igualmente llamadas a pensar la paz más allá de la idea de consenso y armonía. Ubicar la memoria en el lugar del consenso político aniquilaría su poder emancipador. Si entendemos que la memoria tiene un lugar central en la construcción de la paz, en la reconstrucción de las sociedades afectadas por la guerra, entonces debemos comprender el poder de la memoria por su carácter político, por la posibilidad de la negociación, confrontación y debate entre diferentes. Esta idea que apunta al potencial político de la memoria es clave para pensar las diversas iniciativas y estrategias de reconstrucción de la vida cuando esta ha sido marcada por alguna experiencia de violencia. Hacer memoria nos permite, entonces, crear espacios políticos para la conversación y el diálogo entre opuestos, pero también lleva a poner diversos tiempos en relación, a confrontar las realidades y transformaciones de una sociedad.

En este sentido, como lo plantea Gonzalo Sánchez, la memoria es la huella que activa presencias y potencias del pasado en el presente (2003, pp. 24-25). El poder de la memoria está justamente en la capacidad que tiene para confrontar verdades instituidas, para ofrecer otras versiones de lo ocurrido. Es por esto que la memoria tiene un papel importante en la lucha por el esclarecimiento histórico y en la posibilidad de enriquecer el panorama de las voces que cuentan lo ocurrido y sueñan otras posibilidades de futuro.

Como lo proponen Herrera y Cristancho (2013), en la aproximación que realizan a la producción del GMH entre el 2008 y el 2011, es necesario reconocer el lugar de enunciación de las memorias y los modos como ciertas circunstancias políticas e institucionales sitúan a los actores en espacios de incidencia directa o indirecta en la producción de memorias colectivas. En este sentido, seguimos la idea de estos autores respecto a la importancia del lugar de la memoria en el campo de la educación y la cultura política y, por tanto, en la necesidad de reconocer los efectos concretos en la configuración de subjetividades políticas.

En los procesos de subjetivación, la construcción social de la memoria tiene un papel importante, ya que a través de ella se figuran referentes identitarios y formas de ver el mundo, mientras intervienen fuerzas y grupos sociales con repertorios y capitales diferenciados que, de acuerdo con el posicionamiento que tengan en el escenario social, logran que sus intereses y puntos de vista adquieran mayor o menor resonancia en la esfera pública (Herrera y Cristancho, 2013, p. 193).

En este caso, el informe *Bojayá. La guerra sin límites*, producto de un contexto histórico y político particular, configura un lugar de enunciación

cargado de tensiones. La Ley 975 o Ley de justicia y paz creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y estableció como una de sus funciones “presentar un informe público sobre las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales” (Congreso de la República, 2005). Para desarrollar esta función, la CNRR creó el GMH, un área de investigación dirigida por el historiador Gonzalo Sánchez, quien acordó con la CNRR autonomía investigativa y operativa para llevar a cabo la labor de reconstruir la memoria en medio del conflicto armado colombiano.

Como lo destacan Herrera y Cristancho (2013), el GMH, a pesar de que nació en un contexto de negociación con grupos paramilitares derivado de la Ley de justicia y paz, se configuró como un grupo que priorizó el interés por “conocer y situar las víctimas como objeto de reflexión y de política pública” (2013, p. 188), sin que esto lo librara de las tensiones propias del ejercicio de hacer memoria en los marcos de las políticas del Estado.

A pesar de que se insiste en su independencia académica, su accionar se encuentra delimitado por el mandato constitucional que le dio origen y por el entorno nacional e internacional que caracteriza a las políticas públicas sobre violencia política. Con estas consideraciones, la producción de la memoria histórica se halla tensionada por las conflictivas relaciones que se dan entre historia y memoria, por los usos y abusos del recuerdo y del olvido a los que acuden las políticas y por las dificultades y bondades que trae el ejercicio de historiar el pasado reciente, marcado por un presente en el que persisten múltiples expresiones del conflicto (Herrera y Cristancho, 2013, p. 188).

Para Pilar Riaño y María Victoria Uribe (2016), si bien el GMH se convirtió en un agente de la producción de conocimiento acerca del pasado violento, que era capaz de articular relatos plurales sobre la violencia en Colombia, vio su trabajo limitado por las dinámicas estatales e institucionales que buscaban domesticar e instrumentalizar las voces de aquellos que habían sido silenciados y excluidos sistemáticamente. Estas autoras examinaron a la luz de su trabajo como integrantes del GMH tres dilemas críticos de las investigaciones centradas en las víctimas: el dilema entre decir la verdad y la seguridad de los que prestan testimonio cuando el proceso de reconstrucción de la memoria histórica de las atrocidades del pasado tiene lugar en medio de la guerra o la violencia en curso; las tensiones en torno a las voces de las víctimas que ganan autoridad en el proceso de documentación y de los informes finales; y los riesgos de la institucionalización de un discurso sobre las víctimas que capitaliza narrativas en las instituciones estatales y sociales (pp. 4-5) (traducción propia).

Por su parte, Juan Pablo Aranguren (2012), a propósito de su análisis del lugar que ocuparon las víctimas de crímenes de Estado en los escenarios transicionales creados a partir de la implementación de la Ley 975 del 2005, exploró los puntos de tensión y debate generados por el Grupo y por los informes sobre El Salado y Trujillo. Dos elementos son relevantes en su estudio. En primer lugar, el GMH estaba dotado de un doble carácter: se debatía entre la oficialidad que la ley le proporcionaba y la autonomía

académica que generó ambigüedad entre diferentes sectores de víctimas (2012, p. 55). Por otra parte, el GMH se gestó en un contexto particular de enunciación, que impuso unos límites a la escucha de las víctimas de crímenes de Estado, a la adopción de medidas de reparación y a la verdad judicial (2012, pp. 79-80).

En últimas, como lo han señalado estos autores, el GMH no fue concebido como una comisión de la verdad, pues no tenía poderes judiciales ni ejecutivos y generó tensiones, límites y dilemas para la producción de sus investigaciones (Aranguren, 2012; Riaño y Uribe, 2016) (traducción propia). La producción del informe sobre Bojayá no fue la excepción. En particular, el crimen de guerra cobró valor en el marco de la metodología establecida por el GMH para desarrollar sus procesos investigativos, en la que se seleccionaron casos emblemáticos que “[ilustraran] procesos o dinámicas nacionales que [permitieran] explicar las causalidades de la violencia” (CNRR, 2007, citado por Aranguren, 2012).

Por lo tanto, la memoria y su dimensión política entrañan tensiones entre resistencias, silenciamientos y reproducción de poderes instituidos. Las fuerzas y los capitales diferenciados que señalan Herrera y Crisnacho se ponen en escena constantemente y emergen en momentos privilegiados, bien sea para legitimar ciertas posiciones o para activar luchas y transformaciones. Como lo plantea Pilar Calverio, la memoria siempre reclama un doble movimiento:

La fidelidad de la memoria reclama, pues, un doble movimiento: recuperar los sentidos que el pasado tuvo para sus protagonistas y, al mismo tiempo, descubrir los sentidos que esa memoria puede tener para el presente. Se trata, por lo tanto, de una conexión de sentidos que permita reconocer y vincular los procesos como tales, con sus continuidades y sus rupturas, antes que la rememoración de acontecimientos, entendidos como sucesos extraordinarios y aislados. En este sentido, la memoria es un gozne que articula pasado, presente y futuro, pero no necesariamente constituye una práctica resistente. En realidad, según cómo se acople la memoria del pasado a los desafíos del presente, se estará construyendo un relato que puede ser resistente o funcional al poder. (Calveiro, 2006, p. 379)

La construcción de un informe de memoria histórica sobre Bojayá

Bojayá fue definido y seleccionado como un caso emblemático de la violencia ejercida sobre la población civil afro e indígena y así fue asumido y desarrollado. Para su producción, Gonzalo Sánchez convocó a Martha Nubia Bello, docente de la Universidad Nacional de Colombia, que años atrás había gestado procesos de intervención e investigación en la región con el apoyo de profesionales como Constanza Millán y Belky Pulido. Este equipo logró forjar relaciones de confianza con la Diócesis de Quibdó, las

organizaciones sociales y de víctimas, las autoridades étnicas de Bojayá y las organizaciones acompañantes⁷.

Una vez Martha Nubia Bello aceptó ser parte del proceso de producción del informe se definió un primer escenario de interlocución en la ciudad de Quibdó (Acta 1, 2009, 23 de enero) que buscaba debatir la propuesta y establecer los acuerdos para su desarrollo. De dicho escenario se desprendieron al menos tres acuerdos que incluso al día de hoy, en el marco del trabajo desarrollado por el Centro Nacional de Memoria Histórica⁸, se mantienen. El primero fue comprender la masacre en un contexto de larga duración y, por tanto, de contextualización en un cadena de hechos, relaciones y disputas históricas que se originan por el control y dominio del territorio; el segundo tenía que ver con la participación de líderes comunitarios en el grupo de investigadores; el tercero, con la lectura, retroalimentación y validación de la información que cada uno de los actores académicos acopiaba y escribía por parte de las víctimas y los acompañantes sociales vinculados a los procesos regionales del Medio Atrato.

Un acuerdo adicional fue que la socialización de la propuesta se hiciera también en Bellavista. Del cumplimiento de dicho acuerdo se derivaron tres más (Acta 3, 2009, 19 de abril). Dada la gran producción que había sobre la masacre, el primer paso era la revisión cuidadosa del material escrito, visual y en audio que hasta ese entonces se encontraba disperso y difuso para la propia comunidad, las víctimas y las organizaciones. No se trataba de volver a recolectar testimonios, sino más bien de sistematizar la información ya existente, para que de allí se derivaran los procesos de recolección de información acorde a la metodología de esclarecimiento histórico definida por el GMH. Tras la socialización del presupuesto general del proyecto, de los agentes de cooperación que dieron los recursos y

7. El trabajo realizado en Bojayá fue asumido por un equipo del Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia de la Universidad Nacional de Colombia. Inició en diciembre del 2002, en el marco del Proyecto de Atención Psicosocial dirigido a la población de dos municipios afectados por la violencia sociopolítica en Colombia, en convenio con la Red de Solidaridad Social (hoy Departamento de la Prosperidad Social). Dicho trabajo de atención continuó con el apoyo a un proyecto de investigación financiado por Colciencias que tuvo como resultado el texto *Bojayá. Memoria y río. Violencia política, daño y reparación*. El proceso investigativo culminó además con reflexiones planteadas en los siguientes proyectos: “Fortalecimiento de las capacidades locales de las organizaciones sociales en Bellavista, Bojayá”, de la Consejería en Proyectos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Universidad Nacional de Colombia, desarrollado entre octubre del 2003 y enero del 2004; “Evaluación de los procesos de retorno conducidos por el Estado colombiano”, del Instituto Latinoamericano de Estudios Legales Alternativos (ILSA) y la Universidad Nacional de Colombia, ejecutado entre diciembre del 2004 y junio del 2005.
8. Con la Ley 1448 del 2011, el Grupo de Memoria Histórica pasó a formar parte del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), una vez culminó y presentó públicamente el informe *¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad*.

de las demás entidades participantes, se acordó también que el dinero que se obtendría de la publicación del informe y de su posterior venta se destinarían a las acciones de memoria local que se gestaban en región⁹. Finalmente, se solicitó al GMH la entrega del archivo del proceso investigativo a la comunidad de Bojayá, en Quibdó y Bellavista, una vez culminará la producción y publicación en Bogotá.

El GMH arribó a Bojayá siete años después de la masacre del 2 de mayo del 2002. Entonces, emprendió la compleja trama de diálogos, articulaciones y establecimiento de acuerdos con las comunidades para desarrollar procesos de memoria en medio de la continuidad de la guerra. Se encontró con procesos de documentación, de archivo y de memoria. De especial significado fue encontrar el trabajo de registro y contextualización rigurosa de las violaciones a los derechos humanos en Chocó, particularmente en el Alto y Medio Atrato, que desarrollaba la Comisión de Vida, Justicia y Paz (COVIJUPA), de la Diócesis de Quibdó.

La labor del equipo encargado de la investigación fue más de sistematización de una experiencia que articulaba las agendas vigentes de la justicia transicional a los intereses particulares de organización y visibilización étnica y política del Medio Atrato. El informe se sumaba a los dispositivos de memoria especialmente forjados a través de la capacidad organizativa de los grupos étnicos y sociales en la historia reciente de la región y del acompañamiento permanente de la Diócesis de Quibdó.

Este documento de esclarecimiento histórico de los hechos asociados al crimen de guerra del 2 de mayo del 2002 tiene ocho capítulos que recopilan las memorias de la experiencia vivida, las acciones locales de resistencia y dignidad en medio de la guerra y algunas recomendaciones en materia de derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Un documental y una exposición fotográfica denominados de la misma manera acompañan al informe (CNRR-GMH, 2010). Además, en el año 2012, los líderes más jóvenes del Comité realizaron una pieza radial, basada en el informe, denominada *Un río de voces que clama*, que transmitieron en los medios de comunicación local (CNRR-GMH, 2014, 1 de mayo).

En el proceso de producción del informe, el acuerdo sobre la participación de gestores locales en la investigación atiende a la reivindicación histórica de las comunidades habitantes del territorio chocoano de que las apuestas del Estado cuenten con su capacidad reflexiva. Sus conocimientos y la manera como estos se entretujan con profesionales externos se relaciona con su capacidad de experimentar los contextos culturales,

9. La 1.^a edición del informe *Bojayá. La guerra sin límites* estableció que “la totalidad de las regalías producto de la venta de este libro será donada por la Fundación Semana y Editorial Taurus a un proyecto previamente concertado con la comunidad de Bojayá”. La comunidad solicitó dichas regalías como apoyo a la realización de la conmemoración del décimo aniversario de la masacre de Bojayá. Las ediciones posteriores del libro fueron asumidas por la Imprenta Nacional, en el marco de la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica, por tanto, todos los informes son en la actualidad de distribución gratuita.

sociales e históricos de su región y de producir nuevo conocimiento en coherencia con las luchas de su presente. Los gestores de memoria vieron cómo sus vidas y proyectos políticos fueron incorporando nuevas preocupaciones por la posibilidad de aprender juntos que heredó la elaboración de *Bojayá. La guerra sin límites* de los procesos gestados años atrás por el acompañamiento e investigaciones del equipo de la Universidad Nacional de Colombia. Ese aprender juntos además ha establecido parámetros que han logrado forjar relaciones, no exentas de tensiones, con académicos, periodistas y funcionarios públicos.

Ese diálogo complejo entre memorias se da actualmente en un contexto de implementación de dispositivos o *escenarios transicionales* en Colombia (Castillejo, 2014). En este sentido, lo que muestran diversas experiencias locales, en este caso la de Bojayá, es que las comunidades no reciben de manera pasiva la implementación de estos dispositivos. Así como hay tensiones en la producción de memorias también se ponen en escena diálogos complejos entre instituciones del Estado, actores armados y comunidades a la hora de proponer espacios de construcción de paz, perdón y reparación. Como lo plantea Richard (2002),

fuera de las racionalidades exitosas de la modernización y el consenso; fuera de los saberes directivos y las agendas profesionales de las ciencias político-administrativas; en las orillas más deshilvanadas de la discursividad transicional, hay trazas del desastre que no pueden ser incorporadas a los recuentos oficiales. (p. 191)

Hacer memoria y activar dispositivos de tránsito a la paz

En este apartado, proponemos una reflexión sobre las acciones políticas que aparecen después de la activación de diversos ejercicios de memoria en Bojayá, acciones en las que la memoria de la masacre emerge y es articulada a demandas y momentos políticos a nivel local y nacional.

En diversos momentos, los bojayaseños nos han enseñado que es importante no reducir las experiencias de las víctimas a sus memorias de dolor. Es decir, para comprender las memorias de violencia y sus contextos de producción es necesario articularlas a otras. Reconocer las iniciativas locales de recomposición social y de emancipación en medio de la confrontación es un paso necesario para entender las formas como esta comunidad ha enfrentado la guerra y ha creado formas particulares de enfrentar los daños y continuar la vida.

De acuerdo con Beatriz Sarlo, “los pueblos no viven en estado permanente de memoria; [...], en cambio, [...] algunos acontecimientos activan los hechos de memoria” (2007, p. 44). Ninguna sociedad puede vivir permanentemente recordando los horrores de su historia. De ahí la importancia política de acontecimientos que activan memorias, tales como los aniversarios o las conmemoraciones. Es a través de estos dispositivos temporales que experiencias individuales pueden aparecer nuevamente en la esfera pública (Sarlo, 2007) y que acontecimientos particulares pueden

llegar a interpelarnos como sociedad. En esta misma línea, Calveiro (2006) reconoce que los *actos abiertos* de memoria y los ejercicios de memoria promovidos de manera institucional “se orientan por el deseo básico de comprensión, o bien por un ansia de justicia; se trata en estos casos de una decisión consciente de no olvidar, como demanda ética y como resistencia a los relatos cómodos” (2006, p. 377). Esas articulaciones son las que esta autora destaca para comprender la dimensión política de la memoria y en las que, como hemos visto, las tensiones y los riesgos emergen. En los dos casos que presentamos a continuación, esas tensiones son evidentes. Por un lado, las *discursividades transicionales* (Richard, 2002) buscan instalarse como consensos; *paz*, *perdón*, *reparación* son palabras comunes en estas acciones colectivas en las que la memoria de la masacre del 2002 se pone en escena. Pero, por otro lado, están los miedos, las promesas incumplidas, la instrumentalización del dolor del otro y las luchas incesantes por recuperar la autonomía y la dignidad.

Conmemoraciones

El camino del duelo para la gente de Bojayá ha sido largo y difícil. La imposibilidad de llevar a cabo los rituales y prácticas mortuorias propias de su cultura ha obligado a esta comunidad a encontrar nuevas estrategias para tramitar el dolor y gestionar la muerte. Las conmemoraciones de la masacre que se realizan el 2 de mayo de cada año se han convertido en un espacio y un momento vital para hacer el duelo, volver sobre sus realidades en el presente, confrontar a los responsables y proponer horizontes y apuestas de transformación. De manera ininterrumpida, se han realizado quince conmemoraciones, que buscan dignificar a las víctimas directas de la región. Año tras año han desempeñado un papel importante tanto en lo social como en lo ritual y lo político. Además, la fecha ha sido declarada como el día de las víctimas del Chocó. Por ello, el 2 de mayo no se restringe a acciones conmemorativas en Bojayá, sino que acoge propuestas de dignificación de todas las víctimas que ha dejado la guerra en el departamento. Aquí retomaremos algunos aspectos claves de la conmemoración del décimo aniversario, por ser esta una de las más agitadas en términos de debate político.

Ese 2012, año en que se instalan los diálogos entre el Gobierno y las FARC-EP, los habitantes de Bojayá se encontraron en una asamblea comunitaria para hacer un balance de la situación de su municipio y la región después de una década de haber vivido la masacre. Ese momento fue reseñado por la revista *Semana* con el titular “Bojayá, diez años después: una deuda pendiente” (Bules, 2012, 28 de abril). Para sus habitantes, esta deuda aún sigue sin saldarse, a pesar de que hoy hablemos de paz y de horizontes de reconciliación.

En mayo del 2012, los bojayaseños, animados por los líderes del Comité por los Derechos de las Víctimas, por la Comisión de Vida Justicia y Paz, las hermanas agustinas misioneras, el Comité Dos de mayo, las mujeres del grupo Guayacán y los consejos comunitarios locales, decidieron conmemorar ese

aniversario haciendo un balance de los acontecimientos, transformaciones e intervenciones realizadas en el municipio desde el año 2002. En este ejercicio, el informe *Bojayá. La guerra sin límites* tuvo un papel fundamental. En los encuentros de planeación, concertación y trabajo comunitario previo a la conmemoración, el informe apareció como una guía clave para comprender lo que había sucedido, las intervenciones y acciones estatales emprendidas en esos años, los compromisos adquiridos por el Gobierno, las promesas incumplidas y las recomendaciones y pautas señaladas por el mismo informe, que habían sido desoídas por las autoridades durante diez años. El informe, en suma, sirvió para identificar las contradicciones de la intervención del Estado en la región.

Otro de los elementos claves de la discusión propuesta en el balance de los diez años de la masacre fue el carácter regional de las afectaciones, los daños y las causas del conflicto armado. En ese sentido, se propuso un ejercicio de asamblea y se invitó a representantes de los municipios vecinos tanto del departamento de Antioquia como del Chocó. Días previos a la conmemoración, se llevó a cabo dicha asamblea en la que se identificaron varias problemáticas que son ejes comunes en todos los municipios y se elaboró un pliego de peticiones con el apoyo de representantes de organizaciones y gobiernos locales.

Los mismos gestores locales de memoria que participaron en la construcción del informe liderado por el GMH continuaron el trabajo desde entonces y fueron protagonistas en las demandas presentadas en la conmemoración de los diez años de la masacre. Muchos de ellos venían de procesos de liderazgo al interior de sus comunidades, habían sido interlocutores importantes de otras instancias del Estado en intervenciones diversas y desarticuladas que comenzaron desde el mismo momento de la masacre en el 2002. Sin embargo, su participación en el proceso de investigación que llevó a la construcción del informe implicó un ejercicio de formación que los ha convertido desde entonces en *emprendedores de la memoria* (Jelin, 2013).

Así, los bojayaseños continúan haciendo memoria cada 2 de mayo, a través de la conmemoración de la masacre, un ritual religioso que es homenaje a sus muertos y también es un ritual político que hace énfasis en los sentidos regionales que adquiere la palabra *olvido* y las tensiones entre la memoria y la desmemoria. En la reseña del Observatorio Regional del Pacífico sobre los doce años de la masacre, Erlyn, un joven de Bellavista, líder y animador de la emisora Bojayá Estéreo, dice que más que traer a la memoria el evento, cada aniversario es el momento de recordarle al Estado que ellos tienen derechos, no por haber sido víctimas, sino porque es una obligación cumplir con el deber más allá de las promesas hechas a quienes han sido víctimas de la guerra. “Nos lo merecemos porque somos colombianos, y punto”, dice. O como lo recuerda Leyner Palacios (2014), lo que viven los chochoanos es

un olvido reflejado en la falta de las más mínimas condiciones para sobrevivir, pues muchas víctimas todavía esperan con angustia la anhelada atención psicológica y médica, una reparación integral que

no esté hecha de cemento. [...] Con estos doce años de recuerdos y memorias, la gente quiere proyectarse hacia el futuro y dejar un pasado doloroso, pero ¿cómo hacerlo cuando se pregona la justicia y no hay una sola investigación seria sobre los autores intelectuales y materiales de este genocidio?

Como bien lo expone el filósofo Reyes Mate (2008), hablar del papel central de las víctimas implica estar dispuestos a construir un sistema político y económico que se niegue a producir más y no un sistema esquizofrénico que, mientras muestra el dolor del otro, es incapaz de convertir ese dolor en una potencia para crear algo nuevo, una transformación. La centralidad de las víctimas no puede ser, entonces, solo discursiva. Debe tener efectos para que el grito de una de las cantadoras de alabados de Pogue sea atendido: “Si nosotros no empuñamos las armas, déjenos en paz, no nos causen más daño, no nos causen más dolor, no más terror” (Orjuela, 2015, 20 de enero). Las conmemoraciones son, por lo tanto, momentos en los que se activan las memorias y las herramientas políticas para cuestionar los consensos que emergen en la palabra, pero no se traducen en acciones concretas para mejorar las condiciones de vida de la gente que habita territorios marcados por la guerra.

Acto de reconocimiento de responsabilidad por parte de las FARC-EP

Entre el 14 y 16 de agosto del 2014, Leyner Palacios, líder representativo de las víctimas de Bojayá y gestor local de memoria, participó en el primer diálogo entre la mesa de conversaciones y los delegados de víctimas del país¹⁰, que eran doce personas seleccionadas entre un universo que, en Colombia, supera los seis millones. Antes de partir a La Habana, Leyner Palacios solicitó apoyo y asesoría de las organizaciones etnoterritoriales y de víctimas de la región, para acordar que su participación en la mesa de conversaciones transmitiera el sentir no solo de las víctimas que dejó la masacre del 2 de mayo del 2002, sino además del conjunto de daños que el conflicto armado y la discriminación y exclusión histórica ha generado a las víctimas afro e indígenas del Pacífico colombiano.

Una vez culminó la participación de la delegación en la mesa de conversaciones, dos de los negociadores de las FARC-EP le comunicaron a Leyner Palacios la intención de pedir públicamente perdón al pueblo de Bojayá por los hechos ocurridos en el 2002. En coherencia con los acuerdos establecidos, Leyner respondió que compartiría dicha solicitud con las organizaciones regionales de Bojayá, que serían las que determinarían la

10. A la participación de delegaciones de víctimas en la mesa de conversaciones de La Habana, le precedieron los Foros Regionales y el Foro Nacional de Víctimas, realizados entre julio y agosto del 2014. La mesa de conversaciones encargó la planeación y el desarrollo de dicho proceso de participación a la oficina en Colombia de las Naciones Unidas y al Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Véase PNUD (2014, 13 de agosto).

naturaleza de un escenario viable y dignificante para un posible encuentro con las víctimas.

En una reunión, que contempló la participación de líderes y lideresas del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA), la Asociación de Desplazados del 2 de mayo (ADOM), el Comité de Víctimas 2 de Mayo, los cabildos indígenas de Bojayá, la Asociación de Jóvenes Unidos por Amor al Pueblo de Bojayá (AJUAP) y tuvo el acompañamiento de la Diócesis de Quibdó, se analizó la solicitud de las FARC-EP y se acordó emprender un proceso de diálogo con las víctimas directas y poblaciones que cada una de las organizaciones representan, para precisar el interés o no de los pobladores afro e indígenas de atender a una solicitud pública de perdón por parte del grupo guerrillero.

Tras el sondeo realizado por las organizaciones, desde ese entonces reunidas en el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, entre septiembre y noviembre del 2014, se precisó la necesidad de establecer en la mesa de La Habana una reunión entre el Comité conformado y el grupo guerrillero, para compartir los criterios y elementos que las víctimas consideraban que debía tener un acto público de asunción de responsabilidades y de solicitud de perdón hecho por las FARC-EP.

Dicha necesidad se resolvió en un espacio de diálogo entre la mesa de negociaciones y el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, que se llevó a cabo el 18 de diciembre del 2014. En este escenario, el Comité presentó un comunicado derivado de sus procesos de consulta y conversación con las víctimas y organizaciones sociales de la región que especificaba que un acto de tal naturaleza implicaba al menos tres componentes: el primero era el desarrollo de actividades de preparación de las comunidades y de las víctimas de la región; el segundo, el cumplimiento de compromisos del grupo guerrillero en las zonas de Bojayá, donde actuaban y transitaban; y el tercero, la realización del acto en el municipio de Bojayá y no en la mesa de negociaciones en La Habana.

Después del encuentro en La Habana, en el cual la mesa aceptó que el acto de reconocimiento se desarrollara en Bojayá, el Comité emprendió una serie de acciones para consolidar una propuesta de consulta en la región. Esta propuesta buscó determinar la disposición y el interés de las comunidades de escuchar o no a las FARC-EP, conocer sus reflexiones y análisis sobre el proceso de paz y escuchar atentamente sus necesidades, expectativas y propuestas. La consulta se realizó entre marzo y mayo del 2015. Se hicieron recorridos por varias de las comunidades, se levantaron actas de estos encuentros y se contó con el acompañamiento de la Diócesis de Quibdó, la Legión del Afecto, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Víctimas y la Organización Internacional para las Migraciones.

Tras los recorridos, entre junio y agosto del 2015, se sistematizó la información y se llegó al consenso comunitario de generar un escenario de encuentro con los victimarios que permitiera avanzar en acuerdos y compromisos orientados a la dignificación de las víctimas y a garantizar los

derechos a la verdad, la justicia y la reparación de todas las comunidades. Dicho consenso implicó, entre los meses de septiembre y noviembre del 2015, el desarrollo de dos asambleas comunitarias y varias reuniones de encuentro entre los integrantes del Comité por los Derechos de las Víctimas y entre este y otras organizaciones y entidades acompañantes. Estas determinaron el alcance y las necesidades que se debían tener en cuenta en el desarrollo de un encuentro entre victimarios y comunidades de Bojayá.

En un comunicado elaborado por el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, el 27 de septiembre del 2015, se fijaron los criterios para que los actores armados pidieran perdón. Este documento fue una de las guías que trazó el camino por recorrer en el trabajo con las víctimas, el Estado y los actores armados en el proceso de negociación, dado que contiene elementos muy importantes de lo que estas comunidades comprenden sobre el posconflicto, las posibilidades de reparación y la reconciliación. Este texto fue el resultado de un trabajo intenso con las diversas comunidades rurales del municipio de Bojayá.

El documento dejó claro que las víctimas de la región no pueden ser reducidas a quienes fueron afectados directamente por la masacre del 2 de mayo del 2002. Propuso reconocer a todos aquellos afectados por la violación sistemática de sus derechos, por la violencia del Estado y por la agudización del conflicto en estos territorios. Esta extensión de la categoría *víctima* para comprender la complejidad de la guerra en esta región —por ejemplo, con la fuerte presencia militar o la explotación de recursos naturales— también complejizó las demandas que estas comunidades hacen de reparación, por la justicia y la no repetición.

A través de este comunicado, quedó claro que la construcción de la paz y las posibilidades del perdón son asuntos que implican un arduo trabajo en diversos temas. Si bien en el comunicado se reconoció la importancia de la asunción de responsabilidades por parte de los actores, también se exigió que la solicitud de perdón estuviera asociada al fin de la confrontación armada, que se conociera la verdad de las violaciones perpetradas por todos los actores, que finalizaran todas las formas de victimización y sobre todo que este nuevo posicionamiento de los actores armados conllevara un respeto real del ejercicio de la autonomía, el gobierno propio y los derechos étnicoterritoriales de comunidades indígenas y afrodescendientes.

Desde el inicio, las comunidades bojayaseñas hicieron énfasis en el sentido de ese encuentro: más que un *show* mediático debía ser un ritual político que abriera la puerta para que las condiciones fijadas por los pueblos de la región comenzaran a encontrar espacios de realización. Este tipo de actos, que ponen en escena otras posibilidades para imaginar la justicia, son fundamentales porque, a través del trabajo de líderes y comunidades locales, se le recuerda al país que para construir la paz es necesario que el olvido institucional no siga siendo el protagonista mientras se invita a las víctimas a recordar y a hablar de memoria.

En el acto del 6 de diciembre del 2015, los bojayaseños le mostraron al país que la memoria es también un encuentro con la política. Sus relatos y

experiencias se han embarcado para muchos lugares del país y han llegado hasta la mesa de negociación en La Habana, para hacer visible que las comunidades negras e indígenas del Medio Atrato, y especialmente los habitantes de Bojayá, han mostrado gestos sustanciales de perdón, que la memoria y el perdón no están hechos solo de palabras. Los habitantes de esta región han sido agentes de memoria, desde que insistieron en rehabilitar sus territorios después del horror que significó la masacre o —como bien lo dijo una cantadora de la comunidad de Pogue, en Cartagena, el 26 de septiembre en la firma del acuerdo final— desde hace más de quinientos años¹¹. Estos llamados siguen demandando que sean reconocidos los caminos y aprendizajes que en estos años de resistencia han logrado acumular las comunidades, organizaciones y personas que se han visto obligadas a vivir en medio de la guerra y la indiferencia.

Así, los trabajos por la memoria en Bojayá confluyeron de manera particular en el acto de reconocimiento de responsabilidad del día 6 de diciembre del 2015. Este fue un día en el que las comunidades rurales, las víctimas de la masacre, el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP se encontraron cara a cara, un día en el que quedó claro que los encuentros con el pasado, con las historias de dolor, pueden ser un punto de partida para crear posibles futuros encuentros, para proyectar la vida en libertad y autonomía.

Apuntes finales

La experiencia de dolor y la exposición pública de la vulnerabilidad del pueblo bojayaseño han generado diversos efectos desde el mismo momento de la masacre en el 2002 hasta el día de hoy. Por un lado, se ha experimentado una mediatización politizada del sufrimiento; por otro lado, la experiencia atroz de la masacre y el dolor producido por toda esta historia han llevado a un proceso de reflexión política y a una articulación del duelo a las historias de despojo y abandono no solo en la guerra contemporánea, sino en su historia como pueblo (Vergara, 2011).

Como lo narra Judith Butler, para el caso de Estados Unidos después del 11 de septiembre, “al menos implícitamente, los acontecimientos plantearon la pregunta sobre qué forma de reflexión y deliberación política había que adoptar si consideramos la vulnerabilidad y la agresión como puntos de partida de la vida política” (2010, p. 13). En este sentido podríamos decir que la gente bojayaseña ha encontrado respuestas bastante interesantes a la pregunta que propone Butler sobre qué debe hacerse políticamente con el duelo. En ese camino el trabajo de la memoria ha sido un aliado vital.

Si bien los avances y pasos que han dado las víctimas, el Estado y la guerrilla de las FARC-EP en Bojayá son importantes, es necesario reconocer que el camino es largo y frágil. Hoy el debate sobre el lugar de las comunidades

11. Se trata de la composición *Alabao por la paz* (2016), que dice: “Hace quinientos años / sufrimos este gran terror / pedimos a los violentos / que no más repetición / Santa María, danos la paz / Santa María, danos la paz”.

negras e indígenas en la construcción de horizontes de paz continúa siendo un campo de tensión. Varios han sido los llamados para que, en los acuerdos, la perspectiva de estas comunidades sea tenida en cuenta, en un verdadero reconocimiento de sus modos de existencia, que en muchos casos se ven fuertemente impactados y desconocidos, incluso en los marcos que se imagina la paz. Si la paz en Colombia va a ser construida desde la perspectiva territorial, es vital, entonces, que las formas como los pueblos afro e indígenas comprenden y crean sus territorios también tengan lugar.

Las formas como los bojayaseños han resistido y han hecho memoria son todas estrategias para dar continuidad a unos modos de existencia singulares, en los que la autonomía y la libertad para proyectarse como pueblo son vitales. Si no comprendemos esas articulaciones entre memoria y territorio, perpetuaremos lo que podríamos llamar *una política esquizofrénica*, en la que el Estado, los armados y demás actores invocan *discursividades transicionales*, como bien lo dice Nelly Richard, mientras en la práctica local operan bajo lógicas como el autoritarismo y el asistencialismo¹².

Es en el día a día en el que deben palpase los esfuerzos institucionales por construir la paz. Una paz que no implique consensos universalizantes. Es mediante el respeto por las autoridades étnicas locales, los modos de vida y las territorialidades afro e indígenas como las FARC-EP y el Gobierno nacional podrán construir una nueva política. No podemos pensar que la paz implicará el reconocimiento de un nuevo actor que deja las armas para hacer política, a la vez que en esa política se desconoce a los actores desarmados que históricamente han luchado por permanecer en sus territorios y tener una vida digna, según sus propios criterios.

En este sentido, los diálogos y los actos simbólicos deben servir como escenarios públicos que refrenden acciones concretas de respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas y afrochocanos en la región. Una de las principales preocupaciones de estas comunidades tiene que ver con la gobernabilidad de sus territorios en condiciones autónomas, según sus planes de vida y sus nociones de bienestar. Garantizar este ejercicio de autonomía es uno de los grandes retos, así como una de las banderas de lucha de estas comunidades tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz.

El argumento de Judith Butler (2010) sobre la emergencia de marcos para pensar la violencia en la medida en que esta se experimenta nos sirve

12. En reflexiones posteriores se deben considerar, por ejemplo, dos sucesos que se encadenan a los resaltados en este texto y al contexto particular de desarrollo del proceso de paz gestado entre las FARC-EP y el Gobierno nacional. El primero es la entrega que la FARC-EP hizo de un cristo negro a la comunidad como símbolo de reconciliación y perdón, sin que dicha medida reparadora fuera producto de un proceso de consulta y de reconocimiento de la agencia política de las víctimas y las organizaciones etnicoterritoriales del Medio Atrato. El segundo es la visita de Juan Manuel Santos a la cabecera municipal de Bojayá, días después de que se le reconociera como Nobel de Paz. En dicha visita, el mandatario señaló que el dinero que otorga este galardón sería donado a las víctimas.

para reflexionar sobre cómo los trabajos de la memoria emprendidos en el país, en los últimos años, han tenido un impacto político interesante y necesario, y para imaginar un futuro en paz. Butler plantea que

junto con la experiencia de la violencia surge un marco para poder pensarla —un marco que funciona tanto para prevenir cierto tipo de preguntas y de análisis históricos como para producir una justificación moral de la venganza—. Parece crucial prestarle atención a este marco, desde el momento en que él es el que decide, de manera forzosa, lo que puede escucharse, si una postura va a ser tomada como una explicación o como una absolución, si seremos capaces de percibir la diferencia y de aceptarla. (2010, pp. 28-29)

En Colombia continúa existiendo un marco potente en el que los combatientes de guerrilla son calificados de *bandidos terroristas* y son culpados de todos los males del país, tal como lo mostró la contienda electoral del plebiscito por la paz. En este, más de seis millones de colombianos expresaron que no era posible apostarle a la implementación del acuerdo final de paz entre el Gobierno y las FARC-EP. Sin embargo, las experiencias de las víctimas, sus memorias y la creación de espacios para la escucha han permitido la emergencia de otros marcos para pensar la violencia en el país. Es innegable que estamos viviendo paulatinamente una transformación del marco comprensivo de la violencia. Consideramos que, en ese proceso, los trabajos de memoria emprendidos en múltiples lugares de la enorme geografía colombiana han desempeñado un papel relevante. Como lo muestra el caso de Bojayá, la memoria de la guerra también ha servido para pensar otras historias de olvido y violencia y ha servido para hacer visibles territorios que ni siquiera sabíamos que existían. Es decir, en gran parte han sido las víctimas, con sus dolores y experiencias de sufrimiento, resistencia y fortaleza, las que nos han permitido imaginar qué otras cosas podemos hacer con el duelo, diferentes a la venganza y la continuación de la guerra.

En Bojayá, las formas de memoria ancestral, otras temporalidades y nuevos dispositivos políticos siguen dialogando con las apuestas sintetizadas en los proyectos de memoria promovidos por el Estado. Podríamos describir el informe *Bojayá. La guerra sin límites* como un agente que activó diálogos, conversas, composiciones y movimientos ya existentes en Bojayá. Fue un dispositivo construido colaborativamente que propició nuevos movimientos para actuar sobre el pasado, el presente y el futuro. Más que construir una versión de las memorias locales, estos ejercicios avivan fuerzas del pasado, fuerzas que le ha permitido a la gente repensar su presente e imaginar su futuro. Inevitablemente, en estos procesos también se activan fuerzas peligrosas, que afortunadamente el pueblo bojayaseño, gracias a sus repertorios políticos y culturales, ha podido enfrentar, adecuar y transformar. Si bien no ha sido fácil emprender estos encuentros con el pasado, estas comunidades han encontrado en la memoria una fuerza para luchar y pedir por sus derechos en el presente. En este sentido, esas nuevas

subjetividades políticas hoy se activan también con la pregunta por muchas memorias: la de la guerra, la de las luchas por la tierra, que hoy, a pesar de que los bojayaseños cuentan con títulos colectivos, continua tan vigente como en los años ochenta. Lo anterior para reivindicar otras posibilidades de lo que el Gobierno y las guerrillas definen como *territorios de paz*. Queda abierta la pregunta sobre la manera singular en que la sociedad bojayaseña articula los tiempos, sobre las posibilidades necesarias para poder imaginar el futuro con autonomía, no solo mediante la reconciliación con un pasado doloroso, sino a través de la imaginación y la negociación de un país que reconozca la política en un sentido plural.

Referencias

- Alabaoras de Bojayá. (2016, 7 de octubre). *Alabao por la paz*. Consultado el 25 de octubre del 2016 en <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/alabao-por-la-paz>
- Aranguren, J. P. (2012). *La gestión del testimonio y la administración de las víctimas: el escenario transicional en Colombia durante la Ley de Justicia y Paz*. Bogotá: Siglo del Hombre y CLACSO.
- Butler, J. (2010). *Marcos de guerra. Las vidas lloradas*. México D.F.: Paidós.
- Calveiro, P. (2006). Los usos políticos de la memoria. En *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina* (pp. 359-382). Buenos Aires: CLACSO. Consultado el 16 de abril del 2016 en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101020020124/12PIICcinco.pdf>
- Castillejo, A. (2013). La ilusión de la palabra que libera: hacia una política del testimoniar en Colombia. En A. Castillejo y F. L. Reyes (eds.), *Violencia, memoria y sociedad: debates y agendas en la Colombia actual* (pp. 21-40). Bogotá: Universidad Santo Tomás.
- Castillejo, A. (2014). Localización del daño: etnografía, espacio y confesión en el escenario transicional colombiano. *Horizontes Antropológicos*, 20(42), 213-236.
- CNMH. (2013). *¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad*. Bogotá: CNMH. Consultado el 16 de mayo del 2016 en http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2010/informe_bojaya.pdf
- CNMH. (2014, 1 de mayo). *Un río de voces que clama. Bojayá*. Consultado el 16 de mayo del 2016 en <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/centro-audiovisual/audios/un-rio-de-voces-que-claman-bojaya>
- CNRR-GMH. (2010). *Bojayá. La guerra sin límites*. Bogotá: Tauros y Semana.
- Herrera, M. C. y Cristancho, J. G. (2013). En las canteras de Clío y Mnemosine: apuntes historiográficos sobre el Grupo Memoria Histórica. *Historia Crítica*, (50), 183-210.
- Jelin, E. (2013). Memoria y democracia. Una relación incierta. *Política*, 51(2), 129-144.
- Palacios, L. (2014). *Bojayá en el olvido 12 años después*. Consultado el 10 de diciembre del 2015 en <http://pacificocolombia.org/bojay-en-el-olvido-12-aos-despus/>

- Reyes Mate, M. (2008). Reflexiones sobre la justicia de las víctimas. Memorias del Tercer Congreso Iberoamericano de Filosofía. *Revista Estudios de Filosofía*, (octubre), 249-255.
- Riaño, P. y Uribe, M. V. (2016). Constructing memory amidst war: the historical memory group of Colombia. *Transit Justice*, 10(1), 6-24. doi: 10.1093/ijtj/ijv036
- Richard, N. (2002). La crítica de la memoria. *Cuadernos de Literatura*, 8(15), 187-193.
- Sánchez, G. (2003) *Guerras, memoria e historia*. Bogotá: ICANH.
- Sarlo, B. (2007). Rescates de la Memoria. Entrevista. *Revista Universidad de México*, (37), 37-45.
- Vergara, A. (2011). *Ripped from the land, shipped away and reborn: unthinking the conceptual and socio-geo-historical dimensions of the massacre of Bellavista* (tesis de maestría). Universidad de Massachusetts, Amherst. Consultado el 20 de febrero del 2016 en <http://scholarworks.umass.edu/theses/570>

Fuentes primarias

- Acta 1. (2009, 23 de enero). Caso Emblemático de Bojayá. Quibdó, Chocó. Archivo personal.
- Acta 3. (2009, 19 de abril). Caso Emblemático de Bojayá. Bellavista (Bojayá, Chocó). Archivo personal.
- Alto Comisionado para la Paz. (2015, 15 de diciembre). Acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado. Consultado el 15 de mayo del 2016 en <https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/borrador-conjunto-acuerdo-sobre-las-victimas-del-conflicto-1450190262.pdf>
- Builes, M. (2012, 28 de abril). Bojayá, diez años después: una deuda pendiente. *Semana*. Consultado el 15 de mayo del 2016 en <http://www.semana.com/nacion/articulo/bojaya-diez-anos-despues-deuda-pendiente/257203-3>
- Congreso de la República. (2005). Ley 975. *Diario Oficial 45980*. Consultado el 5 de abril del 2016 en <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17161>
- Orejuela, O. (2015, 20 de enero). Entrevista por N. Quiceno y C. Orjuela. Pogue, Bojayá.
- Pacifista*. (2016, 1 de noviembre). En Bojayá, la plebitusa se volvió resistencia. Consultado el 15 de mayo del 2016 en <http://pacifista.co/en-bojaya-la-plebitusa-se-volvio-resistencia/>
- PNUD. (2014, 13 de agosto). *Todo sobre los Foros Regionales y el Foro Nacional sobre Víctimas*. Consultado el 15 de mayo del 2016 en <http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2014/08/13/todo-sobre-los-foros-regionales-y-el-foro-nacional-sobre-victimas-.html>
- Semana*. (2012, 22 de febrero). Cae ‘Mapanao’, presunto responsable de la masacre de Bojayá. Consultado el 15 de mayo del 2016 en <http://www.semana.com/nacion/articulo/cae-mapanao-quien-segun-las-autoridades-es-el-responsable-de-la-masacre-de-bojaya/253821-3>